

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 23 de Junio de 2010 (rec.29/2010).

ENCABEZAMIENTO

SENTENCIA EN APELACION

Madrid, a veintitres de junio de dos mil diez.

Visto el recurso de apelación que ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido

Administración General del Estado, actuando en su nombre el Sr. Abogado del Estado, frente a la sentencia dictada por el Ilmo.

Sr. Magistrado del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 1 de fecha 1 de marzo de 2010 en el recurso seguido por

el procedimiento abreviado nº 372/08, siendo recurridos D^a Marina , D^o Hernan y D^o Mariano actuando en sus nombres el Letrado Sr. D^o Jorge Aparicio Marbán, siendo la cuantía del presente recurso de

indeterminada.

ANTECEDENTES

PRIMERO: Se interpone recurso de apelación por Administración General del Estado, actuando en su nombre el Sr. Abogado del Estado, frente a la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 1 de fecha 1 de marzo de 2010 en el recurso seguido por el procedimiento abreviado nº 372/08, solicitando a la Sala, se revoque la sentencia apelada y se declare el ajuste a la legalidad del acto administrativo de la que trae causa.

SEGUNDO: Recibidos los autos correspondientes al recurso de apelación, se acordó señalar para votación y fallo el veintidós de junio de dos mil diez.

TERCERO: En la tramitación del presente recurso de apelación se han observado las prescripciones legales previstas en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y en las demás disposiciones concordantes y supletorias de la misma.

FUNDAMENTOS

PRIMERO: Es objeto de impugnación en la presente apelación, la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado Central de lo Contencioso

Administrativo nº 1 de fecha 1 de marzo de 2010, por la que se estima parcialmente la pretensión de la hoy apelada.

Se impugnó ante el juzgador de instancia la desestimación por silencio administrativo de la nulidad del reparto de la productividad adicional por cumplimiento de objetivos, relativo a 2007.

La sentencia fue estimatoria de las pretensiones actoras en cuanto anuló el acto impugnado.

SEGUNDO: Aceptamos los acertados argumentos contenidos en la sentencia apelada. En esencia la recurrente vuelve a insistir en los planteamientos esgrimidos en la instancia.

Previamente a entrar en el análisis de la cuestión de fondo hemos recordar los elementos esenciales de la regulación en la materia que nos ocupa. Estos son sintetizados por la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2004 dictada en recurso de casación en interés de Ley 99/2002, en cuyo fundamento jurídico segundo dispone:

"La regulación de carácter general del complemento de productividad se halla contenida tanto en las normas sobre función pública, como en las laborales:

a) En el ámbito de la función pública y de conformidad con lo que dispone el artículo 23.3.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, el complemento de productividad sirve para retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo, criterio ampliado por el artículo 21.e) de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, que señala que el complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad y la dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar el resultado del mismo.

Con posterioridad, señala el artículo 13.8 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, "corresponde a los Ministros, sin perjuicio de su desconcentración o delegación en los órganos superiores o directivos del Ministerio o en los directivos de la organización territorial de la Administración General del Estado, administrar los recursos humanos del Ministerio de acuerdo con la legislación específica en materia de personal. Fijar los criterios para la evaluación del personal y la distribución del complemento de productividad y de otros incentivos al rendimiento legalmente previstos".

La Ley 9/1987, de 12 de junio, de regulación de los órganos de representación, determinación de condiciones y participación, señala en su artículo 9.2.c) que las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su respectivo ámbito, tendrá derecho a emitir informe, a solicitud de la Administración pública correspondiente, sobre las "cantidades que perciba cada funcionario por complemento de productividad" y en su artículo 32 señala que, con relación a la participación en la

determinación de las condiciones de trabajo, serán objeto de negociación en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública "la aplicación de las retribuciones de los funcionarios públicos".

Por su parte la sentencia de 8 de noviembre de 2002 del Alto Tribunal, dictada en la casación 189/1999, declara:

"Sobre este punto y siguiendo la doctrina jurisprudencial de las sentencias de esta Sala y Sección de 21 de marzo de 2002 partimos de las siguientes premisas:

a) El análisis de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, no puede desconocer el marco constitucional y el contexto en que ese marco se desarrolla.

En este punto, el artículo 28.1 de la CE reconoce el derecho de libertad sindical y acoge la pretensión de los sindicatos de participar en un proceso de negociación en cuanto que es parte esencial de su acción representativa, como reconocen las sentencias constitucionales núms. 53/82 de 22 de julio, 7/90 de 18 de enero, 13/90 de 26 de febrero, 184/91 de 30 de septiembre, 75/92 de 14 de mayo, 168/96 de 29 de octubre, 90/97 de 6 de mayo, 80/2000 de 27 de marzo y 224/2000 de 2 de octubre.

b) El artículo 37.1 de la Constitución reconoce el derecho de negociación colectiva y de él se deriva tanto la garantía de una libertad negocial como la existencia de un mandato al legislador para establecer un sistema eficaz de negociación, habiendo destacado el Tribunal Constitucional en STC núms. 4/83 de 28 de enero, 12/83 de 22 de febrero, 37/83 de 11 de mayo, 59/83 de 6 de julio, 74/83 de 30 de julio, 118/83 de 13 de diciembre, 45/84 de 27 de marzo, 73/84 de 27 de junio, 39/86 de 31 de marzo, 104/87 de 17 de junio, 75/92 de 14 de mayo, 164/93 de 18 de mayo, 134/94 de 9 de mayo, 95/96 de 29 de mayo y 80/2000 de 27 de marzo, que la negociación colectiva forma parte del derecho de libertad sindical, concebido como medio primordial de acción sindical para el cumplimiento de los fines constitucionalmente reconocidos a los Sindicatos en el artículo 7 de la CE.

c) En esta línea, la Ley Orgánica de Libertad Sindical reconoce en su artículo 2.2 el derecho de las Organizaciones Sindicales a la negociación colectiva, sin distinciones o matizaciones respecto de los funcionarios públicos y su participación institucional y acción sindical en el artículo 6.1, lo que resulta también de aplicación en virtud de los Convenios Internacionales ratificados por España, en especial los Convenios nº 151 y 154 de la OIT, que imponen la obligación de adopción de procedimientos que permitan la participación de los representantes de los funcionarios en la determinación de las condiciones de empleo y que la negociación colectiva sea aplicable a la Administración pública.

En consecuencia, no cabe hablar de vulneración del artículo 28 de la Constitución en relación con los artículos 37 y 103.3 de la Constitución, ni de los artículos 30, 31 y 32 de la Ley 9/87, así como la referencia que se contiene a los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical por cuanto que se dio

audiencia a los Sindicatos, formularon alegaciones y sus razonamientos fueron tenidos en cuenta a la hora de elaborar la disposición recurrida."

Por otra parte del cuerpo jurisprudencial resulta que son las condiciones económicas de trabajo de los funcionarios, entre otras, las que han de ser objeto de negociación. Pues bien, la potestad de autoorganización no se incluye, efectivamente, en el ámbito de la negociación colectiva, pero no es menos cierto que los criterios de distribución del complemento de productividad no se engloban en dichas facultades. Cuestión distinta es, que la Administración destine partidas en la cuantía que estime oportuna, a los distintos servicios, pero otra es los criterios objetivos de rendimiento que han de considerarse para el reparto de dicho complemento.

La sentencia impugnada estima el recurso por un solo motivo, y es que no consta notificado a los representantes de los funcionarios los criterios objetivos adoptados para realizar el reparto del completo que nos ocupa. Efectivamente, se reconoce que existió negociación en cuanto hubo reuniones entre la Administración y los sindicatos sobre el particular, si bien concluyeron sin acuerdo. La Administración fijó por ello los criterios. Pero el problema es que tales criterios no constan se comunicaran, como hemos dicho.

El Sr. Abogado del Estado alega que tras la entrada en vigor de la Ley 7/2007, quedó derogada la facultad reconocida en el artículo 9.4 c) de la Ley 9/1987 de conocimiento y ser oída sobre las cantidades que perciba cada funcionario por complemento de productividad.

El artículo 40 de la Ley 7/2007 establece:

"1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las siguientes funciones, en sus respectivos ámbitos:

a. Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento.

b. Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo.

c. Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.

d. Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos.

e. Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y

ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.

f. Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad."

Decíamos que no se trata de comunicar las retribuciones por complemento de productividad percibidas por cada funcionario, pero si de los criterios objetivos para alcanzar dicha productividad lo cual hace referencia a Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo y Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones.

Se trata por tanto del conocimiento de los criterios objetivos que determinan la atribución del complemento, pero no del concreto aplicado a cada funcionario. Tal es el motivo de estimación parcial del recurso que esta Sala confirma.

Debemos pues acoger las argumentaciones contenidas en la sentencia apelada.

TERCERO: Según lo razonado procede desestimar el recurso de apelación.

Debemos imponer las costas al apelante conforme dispone el artículo 139.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, por el poder que nos otorga la Constitución:

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto y promovido Administración General del Estado, actuando en su nombre el Sr. Abogado del Estado, frente a la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 1 de fecha 1 de marzo de 2010 en el recurso seguido por el procedimiento abreviado nº 372/08, siendo recurridos D^a Marina, D^o Hernan y D^o Mariano actuando en sus nombres el Letrado Sr. D^o Jorge Aparicio Marbán, debemos confirmar y confirmamos la citada sentencia, con imposición de costas al apelante.

Así por ésta nuestra sentencia, que se notificará haciendo constar que contra la misma no cabe recurso de casación, siguiendo las indicaciones prescritas en el artículo 248 de la Ley Orgánica 6/1985, y testimonio de la cual será remitido al Juzgado de origen a los efectos legales junto con la Pieza Separada de Medidas Cautelares, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

